

### ACERCA DE ESTE INFORME

#### Objetivo

Este informe pretende aportar algunas nociones básicas para comprender la escalada de violencia que afectó al departamento del Cauca durante el 2023 y evidenciar los riesgos de protección asociados.

#### Metodología

El análisis se basa en una revisión secundaria de datos, informes y documentos elaborados por organizaciones internacionales y organizaciones e investigadores colombianos. Esta información fue complementada con seis entrevistas realizadas a informantes clave de agencias de la ONU, ONG internacionales y organizaciones civiles colombianas.

Este análisis de los riesgos de protección sigue el Marco Analítico de Protección desarrollado por el Clúster Global de Protección, el cual permite la identificación y el seguimiento de los riesgos de protección. Este marco requiere la consideración de cuatro áreas amplias: los factores que influyen en el contexto de la protección, sea positiva o negativamente; las violaciones y abusos reportados en distintas ubicaciones geográficas por diferentes grupos poblacionales; los efectos prioritarios sobre la población (aquellos que afectan su dignidad, seguridad y bienestar) derivados de las violaciones y abusos específicos sufridos por cada grupo poblacional y distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas; y la combinación de la agencia individual, los mecanismos locales, el alcance de las instituciones nacionales y la capacidad de respuesta humanitaria para hacer frente a las violaciones y abusos (Clúster global de protección, consultado el 29/11/2023).

Un análisis de riesgo efectivo depende de un profundo conocimiento del contexto; es crucial subrayar que no es necesario que un riesgo tenga una alta probabilidad de presentarse para que sea motivo de preocupación. El análisis de los riesgos implica la identificación y el examen sistemático de posibles eventos futuros que puedan afectar a los individuos, los bienes y el medioambiente. Este informe presenta los riesgos identificados y proporciona bases que explican en términos generales los riesgos y sus contextos. Las causas identificadas representan un conjunto de factores y eventos que podrían contribuir a la materialización de los riesgos; por otro lado, el análisis del impacto esboza las posibles consecuencias humanitarias asociadas a estos.

#### Limitaciones

La continua tendencia a empeorar de los factores presentes en el Cauca hace muy difícil establecer si se producirá un riesgo o si la situación simplemente se deteriorará de manera gradual. Aunque este análisis sigue una metodología específica, el análisis de los riesgos de protección no es una ciencia exacta. Los vacíos de información limitan el análisis. Estos son especialmente pronunciados en los casos relacionados con la violencia basada en género (GBV por sus siglas en inglés) y el reclutamiento forzoso de niños, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados. Resulta particularmente difícil identificar el impacto en las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, sobre todo por la falta de información y de datos actualizados. La dificultad para acceder a determinadas regiones unida al temor a las amenazas, también, obstaculizan el acceso a la información.

#### TABLA DE CONTENIDO

Antecedentes y situación actual.....	3
RIESGO 1: .....	5
RIESGO 2: .....	6
RIESGO 3: .....	7
Últimos acontecimientos.....	8



ELN está presente en más de 200 municipios de Colombia (Defensoría del Pueblo de Colombia 09/12/2022).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron un grupo armado nacido en la década de 1960. Era el mayor grupo insurgente del país. Se desmovilizó en 2016 en el marco de un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano (Verdad Abierta 18/11/2012; InSight Crime 16/11/2011).

9

## GRUPOS ARMADOS MENCIONADOS EN EL INFORME

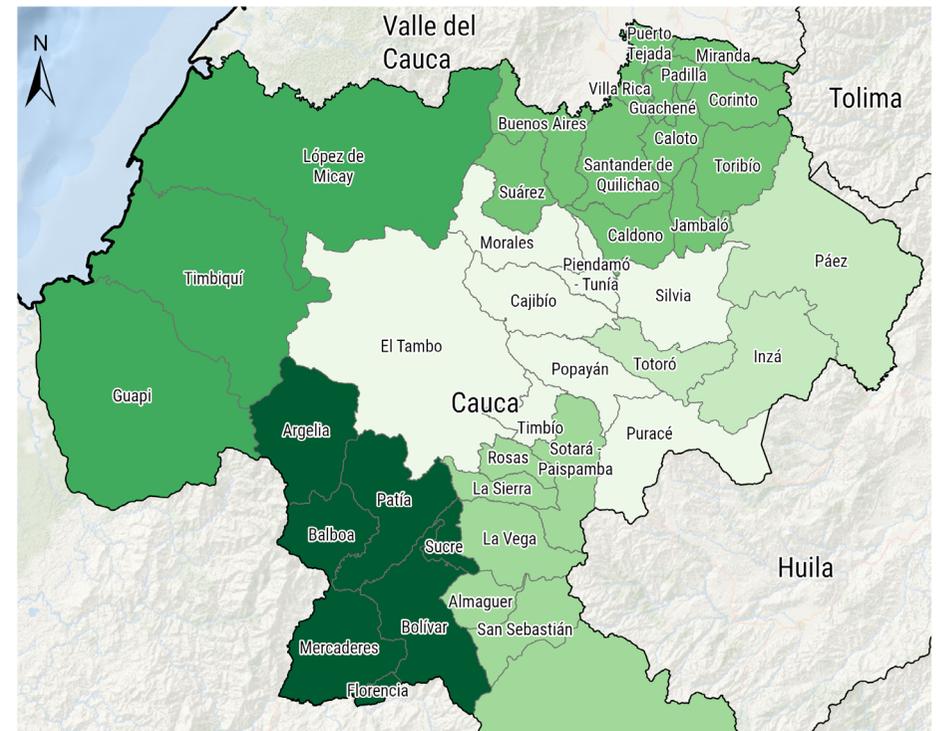
El Estado Mayor Central es una agrupación formada por varios grupos de disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) (El País 16/04/2023). Aunque estos disidentes afirman estar articulados en una organización unificada, su nivel de cohesión y su estructura de mando permanecen en duda (CORE 24/07/2021; CORE 05/06/2023; Razón Pública 26/03/2023).

La Segunda Marquetalia, junto con el EMC, es la segunda de las dos agrupaciones de grupos disidentes de las FARC-EP en Colombia (CORE 24/07/2021). Este grupo armado nació en el 2019, momento en el que algunos excomandantes de las FARC-EP, como alias 'Iván Márquez', 'Jesús Santrich', 'Romaña' y 'El Paisa' anunciaron que se rearmaban (El País 21/04/2023; EE 07/07/2023).

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) nacieron tras la desmovilización del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Gobierno colombiano los llama el "Clan del Golfo" por su origen y fuerte presencia en el Golfo de Urabá. Anteriormente, el Gobierno colombiano los llamaba Los Urabeños y Clan Úsuga (Badillo y Mijares 16/01/2022).

El Ejército de Liberación Nacional es un grupo armado nacido en la década de 1960. El

Mapa 1. Distribución geográfica de las subregiones del Cauca



Fuente: Gobernación del Cauca consultado el 6/12/2023

## ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El departamento del Cauca, situado en la costa del Pacífico, en el sur-occidente de Colombia, tiene una compleja y arraigada historia de violencia y conflicto. Esta región ha enfrentado históricamente retos significativos, como la presencia de diversos grupos armados, los cultivos ilícitos y una larga lucha por el control territorial. Su ubicación geográfica, adyacente al Océano Pacífico y cercana a las ciudades de Cali y Buenaventura (principal puerto del Pacífico) permiten a los grupos armados establecer zonas de tránsito, ubicar estratégicamente cultivos ilícitos y obtener recursos de las comunidades a través del control social (Colectivo Solidaridad 13/06/2022).

A lo largo de su historia y hasta el presente, el territorio ha estado expuesto a los riesgos de protección preexistentes. La violencia, las amenazas y los homicidios han afectado profundamente la región, infundiendo miedo e inseguridad. Los desplazamientos forzados y el confinamiento han trastornado la vida de sus habitantes, y han obligado a las comunidades a reubicarse o a soportar restricciones en su movilidad. La VBG, la cual engloba a la violencia y explotación sexual, plantea graves riesgos, sobre todo para las poblaciones vulnerables. El reclutamiento, la utilización y la explotación de niños y adolescentes por parte de grupos armados agravan aún más los problemas de la región. La presencia generalizada de minas terrestres antipersona, municiones sin detonar y artefactos explosivos improvisados añade un nivel de riesgo que afecta a la seguridad y la movilidad de las personas (Comisión de la Verdad, consultada el 02/11/2023). Estos riesgos de protección profundamente arraigados subrayan la naturaleza polifacética de los retos que afligen al Cauca.

La región es multiétnica y multicultural, e incluye comunidades afrocolombianas, indígenas y rurales. Estas comunidades enfrentan los ataques sistemáticos por parte de grupos armados que pretenden perturbar sus tradiciones y costumbres, y agravar su lucha por el derecho a la propiedad libre y digna de la tierra (KII 27/09/2023; ACAPS 06/08/2021). Las comunidades se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a su marginación histórica y a sus relaciones únicas con el territorio, derivadas de generaciones de lazos culturales y ancestrales. Para sus habitantes, la tierra no es un mero espacio físico, sino un aspecto fundamental de su identidad, sus medios de subsistencia y sus prácticas culturales (Comisión de la Verdad, consultada el 02/11/2023). Esta desempeña un papel fundamental en sus tradiciones, sustento y bienestar general. Los hechos violentos que afectan a estas comunidades causan profundos e intrincados trastornos y daños a esta relación simbiótica (Comisión de la Verdad consultada el 29/11/2023). Aunque es evidente que todas las comunidades sufren, la información disponible no especifica qué comunidad se ha visto más gravemente afectada o ha experimentado un tipo concreto de acción violenta con mayor intensidad.

Tabla 1. Información básica

INDICADOR	CAUCA	COLOMBIA
Población (2022)	1 558 045 millones	52 215 503 millones
% de la población rural	64,33 %	23,80 %
Acceso a fuentes de agua mejoradas (2022)	62,40 %	62,70 %
Disposición adecuada de excretas (2022)	88,60 %	79,80 %
Grupo étnico (2018)	Indígena = 24,90 % Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera = 19,79 %.	Indígena = 4,28 % Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera = 6,77 %.
Índice de pobreza multidimensional (2022)	18,30 %	12,90 %
Tasa de homicidios (2021)	54,43 %	26,85 %
Tasa de desempleo (2022)	8,70 %	11,20 %

Fuentes: DANE (22/03/2023, 22/02/2023, 23/05/2023 a, 23/05/2023 b, 08/02/2022, 23/05/2023 c, y 05/04/2023); OACDH (26/07/2022)

El Cauca ha sido escenario de disputas históricas entre sectores sociales y grupos armados que se enfrentan por la propiedad de la tierra, lo que ha hecho que la región se vea inmersa en la violencia durante siglos. Estos conflictos están relacionados con el tráfico de cocaína y la minería ilegal, actividades que, a su vez, están asociados con el aumento de la presencia de grupos armados. Múltiples grupos armados han estado presentes en el territorio desde la década de 1960 (Comisión de la Verdad consultada el 02/11/2023).

En 2016, el Gobierno firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el cual marcó un hito importante en la lucha contra el conflicto armado en el Cauca. El acuerdo no sólo pretendía poner fin a décadas de conflicto armado, sino, también, abordar los problemas sociales y económicos subyacentes (Colectivo Solidaridad 22/07/2022). Sin embargo, la retirada de las FARC-EP del territorio no se tradujo en una disminución de la violencia. La firma del acuerdo trajo consigo un periodo de relativa paz que duró aproximadamente año y medio, pero en el 2018 se hizo cada vez más evidente que otros grupos armados se reconfiguraban y disputaban el control de las zonas dejadas por las FARC-EP, lo que agravó progresivamente el conflicto armado (FIP 15/10/2023; El País 19/08/2023).

## Situación actual

Para octubre del 2023, el Cauca se había convertido en el departamento con el mayor número de incidentes violentos en el país. Hasta el 22 de noviembre, habían ocurrido 7 masacres, 11 desplazamientos masivos y 8 casos de confinamiento a lo largo del 2023. Más de 4800 personas se habían visto afectadas por el desplazamiento y 3200 por los confinamientos (OCHA consultada el 07/11/2023). No obstante, es importante reconocer las posibles variaciones en las cifras reportadas. Una de las razones por las que estas cifras podrían ser superiores a las registradas es la falta de información sobre los sucesos relacionados, causada por las dificultades a las que se enfrentan el Gobierno y las organizaciones para acceder a algunos municipios (KII 15/11/2023; KII 08/11/2023). Los vacíos en la información reportada ponen de manifiesto la complejidad para obtener datos precisos en determinadas regiones del Cauca.

Entre los grupos armados ilegales que operan en la región, hay al menos tres facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Aunque actualmente es difícil determinar el número exacto de grupos armados en el territorio, en 2022, más de ocho grupos armados se disputaban el control social y territorial del departamento (OCHA 15/09/2023; Semana 06/02/2022).

A pesar de que la violencia perpetrada por los grupos armados afecta significativamente a todo el departamento, algunas regiones experimentan desafíos más pronunciados que otras (KII 08/11/2023). En el norte, las comunidades indígenas se enfrentan al desplazamiento, al confinamiento y el reclutamiento forzado de grupos armados (KII 14/11/2023). La región meridional destaca como el epicentro de intensos enfrentamientos en los que participan múltiples grupos armados que coaccionan a las comunidades y agravan los conflictos en municipios concretos. A finales de noviembre, Argelia, en el sur del Cauca, ocupaba el quinto lugar entre los 30 municipios que reciben más población desplazada y el sexto con mayor concentración de personas afectadas por bloqueos y desplazamientos masivos (ACNUR 20/11/2023). El norte y el sur del Cauca exhiben los mayores niveles de violencia en todo el Cauca: en cada uno se registran más de 100 sucesos violentos y más de 1000 personas afectadas entre enero y noviembre de 2023 (OCHA consultado 07/11/2023). Otras zonas del departamento, como el Macizo y el Pacífico, situadas respectivamente al occidente y al oriente, también padecen el impacto de los hechos violentos (EE 17/04/2023). Existe información limitada sobre los hechos violentos infligidos a las comunidades afrocolombianas en el Pacífico (KII 08/11/2023; KII 01/11/2023).

La escalada de la violencia supone una amenaza significativa, especialmente para los

niños y grupos poblacionales como las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (KII 01/11/2023). Junto con el impacto directo de las acciones armadas sobre estas poblaciones vulnerables, las dinámicas económicas legales e ilegales también afectan a estas comunidades, socavando aún más sus territorios y su patrimonio cultural (Comisión de la Verdad, consultada el 15/11/2023). Por ejemplo, los megaproyectos administrados por varias empresas multinacionales y entidades privadas —como la controvertida represa de Salvajina, una de las principales centrales hidroeléctricas de Colombia ubicada en la zona noroccidental del Cauca— han generado preocupación por sus impactos sociales y ambientales (El País 16/05/2017).

Las acciones violentas de los grupos armados, incluidos los incidentes de confinamiento, la colocación de minas terrestres y otros riesgos de protección que afectan a las comunidades, no sólo suponen amenazas directas para la seguridad y el bienestar de la población, sino que, también, crean barreras infranqueables para el acceso de la ayuda humanitaria. Estos riesgos para la seguridad dificultan considerablemente la prestación oportuna y eficaz de ayuda humanitaria, e impiden que los trabajadores humanitarios lleguen a las comunidades necesitadas (KII 08/11/2023; KII 01/11/2023).

## Factores agravantes de la crisis

El Cauca es sumamente vulnerable al cambio climático y las amenazas climáticas, lo que afecta a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria (ONU Mujeres et al. 31/08/2017). A causa de El Niño, es probable que Colombia experimente fuertes precipitaciones hasta finales de 2023 y registre condiciones más secas de lo normal y altas temperaturas en el primer trimestre de 2024. Estas condiciones pueden desencadenar escasez de agua, afectaciones relacionadas con la sequía y una mayor incidencia de incendios forestales, lo que plantea amenazas adicionales para la salud, los medios de subsistencia, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de las personas (MinAmbiente Colombia 04/11/2023). Es probable que las comunidades locales vean afectadas sus prácticas agrícolas y pesqueras no sólo por las economías ilegales, sino también por los proyectos extractivos presentes en la región (Mongabay 16/01/2023).

## RIESGO 1:

El fracaso de los cese al fuego puede provocar una escalada de violencia y un aumento de los sucesos violentos, agravando la inestabilidad social

### Justificación

En noviembre de 2023, hubo dos cese al fuego bilaterales entre el Gobierno colombiano y los grupos armados (El País 18/10/2023 y 04/08/2023; Presidente de Colombia 31/12/2022). El primer cese al fuego se pactó con el ELN e inició el 3 de agosto de 2023, con una duración prevista de seis meses hasta el 29 de enero del 2024. El segundo cese al fuego fue pactado con el Estado Mayor Central (EMC) e inició el 17 de octubre de 2023 con una duración prevista de tres meses hasta el 15 de enero de 2024. Este era el segundo cese al fuego que el Gobierno intentaba establecer con el EMC. En mayo el grupo armado quebrantó el primer cese al fuego tras el asesinato de cuatro menores indígenas (El País 22/05/2023).

En julio, el Cauca era el departamento con el mayor número de violaciones del cese al fuego (25 incidentes). El Cauca es actualmente una de las regiones donde el EMC tiene una presencia significativa y la única donde el desescalamiento de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales no fue evidente durante el primer cese al fuego (Indepaz 01/07/2023). Hasta noviembre, a pesar de la continuación de ambos cese el fuego, habían persistido las acciones violentas e intimidaciones a la población tanto por parte del ELN como el EMC. Algunos expertos sostienen que ambos grupos armados pueden tener pocos incentivos para entablar negociaciones, ya que actualmente parecen estar fortalecidos tanto militar como económicamente (KII 08/11/2023; Mutante 14/07/2023).

El departamento del Cauca es un territorio disputado por varios grupos armados que buscan controlar economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal (EE 12/05/2022). Se ha producido un notable aumento del número de grupos ilegales en comparación con periodos anteriores. Estos grupos no sólo buscan tener el control territorial, sino, también, influencia social (KII 08/11/2023). Estos se infiltran en las juntas de acción comunal, que son organizaciones cívicas y comunitarias vitales formadas por residentes y cuyo propósito es el de abordar colaborativamente los problemas locales. Estas juntas desempeñan un papel crucial en la organización de actividades sociales, culturales, educativas y medioambientales, la gestión de recursos para obras públicas o proyectos comunitarios, y la representación de la comunidad ante las autoridades locales. La infiltración de los grupos armados en estas juntas de acción representa una grave amenaza para el tejido democrático de la comunidad, en la medida que estas son una parte integral de la sociedad colombiana, la cual permite a los residentes participar activamente en la gestión de sus comunidades (KII 01/11/2023; KII

27/09/2023). Las acciones de estos grupos armados no sólo socavan la base democrática de estas juntas comunitarias, sino que también representan una amenaza directa para el bienestar y la seguridad de los residentes, pues la escalada de violencia se caracteriza por un mayor nivel de brutalidad (KII 01/11/2023; Pesquisa Javeriana 15/06/2021).

El hecho de que los cese al fuego mencionados no incluyan a otros grupos también pone en peligro la estabilidad de los cese al fuego y a la población (ACAPS 26/07/2023). Los grupos armados tienen estructuras organizativas complejas y descentralizadas, lo que permite a distintas facciones romper el cese el fuego de forma independiente, sin coordinarse necesariamente con otras. Esta complejidad afecta a la eficacia y las perspectivas del cese el fuego y las posibilidades de negociaciones pacíficas con estos grupos (KII 08/11/2023; La Silla Vacía 08/10/2023).

### Impacto

El fracaso del cese al fuego en el Cauca podría desencadenar una escalada de violencia, lo que implica graves riesgos para la protección de la población civil. Entre enero y noviembre de 2023 se produjeron más de 400 hechos violentos en el departamento (OCHA, consultado el 29/11/2023). El fracaso de los cese al fuego pone en peligro la seguridad de la población, exponiéndola a masacres, confinamientos, desplazamientos, asesinatos selectivos y VBG (KII 08/11/2023).

Tabla 2. Hechos violentos y personas afectadas en el Cauca en el 2023

	CASOS	PERSONAS AFECTADAS
Homicidios	189	224
Secuestros	20	26
Masacres	7	23
Artefactos explosivos	16	22
Confinamientos	8	3295
Desplazamientos	9	4848

Fuente: ACAPS con datos del OCHA (consultado el 29/11/2023)

La ruptura de los cese al fuego socava la confianza en los procesos de paz, erosiona el apoyo público a las iniciativas del Gobierno y afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas (KII 14/11/2023; CNTI 06/11/2023). La respuesta más probable a un cese al fuego fallido es una mayor militarización del Estado, lo que históricamente ha resultado en una escalada de la violencia. Casos anteriores de militarización no sólo provocaron enfrentamientos directos y fuegos cruzados, sino que

también pusieron en peligro el acceso a recursos esenciales, como el agua potable, el saneamiento, la educación y un medioambiente sano (CNTI 06/11/2023). Un ejemplo es la Operación Trueno, una operación militar lanzada en agosto en el sur del Cauca para recuperar el control de los municipios de la zona. Los enfrentamientos en la zona entre las fuerzas armadas y el EMC resultaron en varios asesinatos, desplazamientos y el confinamiento de civiles (ACAPS 24/10/2023).

## RIESGO 2:

El conflicto y la violencia prolongados implican impedimentos y restricciones, que dificultan el acceso a recursos, oportunidades, servicios, documentación y justicia. Esto supone una amenaza significativa para el bienestar de la comunidad y conduce a la degradación de los medios de subsistencia.

### Justificación

Dada la diversidad de recursos del Cauca, que incluye abundantes recursos naturales, fuentes de agua, biodiversidad y terrenos montañosos, el departamento se ha convertido en una zona estratégica para los grupos armados. Estos grupos armados impulsan el cultivo de coca en la zona. Asimismo, las fluctuaciones de los precios de la coca desempeñan un papel importante en la economía local (KII 27/09/2023; Comisión de la Verdad consultada el 02/11/2023). Cuando los precios son altos, las comunidades obtienen importantes ingresos de la industria; en contraste, los precios bajos les obligan a buscar otras fuentes de ingresos, lo que afecta a sus medios de subsistencia. En un contexto de incertidumbre económica, las personas corren un alto riesgo de ser instrumentalizadas por los grupos armados, especialmente en actividades de extorsión y robo, y mediante el reclutamiento forzado de niños y adolescentes (KII 01/11/2023; KII 27/09/2023).

El incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC-EP ha llevado a un aumento de los cultivos de coca en el Cauca, que proporcionan importantes ingresos a las comunidades, pero, al mismo tiempo, afectan al medioambiente y a los derechos humanos, desvían las fuentes de agua y deterioran la fertilidad del suelo (KII 14/11/2023). En la actualidad, el Cauca es uno de los cinco enclaves cocaleros que experimenta el crecimiento más significativo en área de cultivo en toda Colombia con más de 16 500 hectáreas cultivadas (UNODC 20/10/2022). Aunque no existe una cifra exacta del porcentaje de la población dependiente de la coca, las estimaciones de los expertos varían entre el 10-12% de la población departamental, y en algunos municipios como Argelia y El Tambo se cree que este porcentaje es cercano al 90% (OpenDemocracy 29/09/2023; KII 27/09/2023).

Los proyectos extractivos y la minería ilegal en la región amenazan la sostenibilidad de los recursos naturales, contaminan el suelo y el agua, y afectan a la agricultura y la ganadería. Estas actividades también contribuyen a la violencia y los conflictos, pues obligan a los habitantes a huir de sus hogares (KII 01/11/2023; KII 27/09/2023). La minería ilegal ha estado presente en el departamento del Cauca desde la década de 1970 y se intensificó de manera significativa por las acciones de los grupos armados en la década de 1990 (Comisión de la Verdad, consultada el 11/08/2023). La elevada demanda de oro y las fluctuaciones de los precios de la coca han renovado el interés de los grupos armados por la minería ilegal (KII 08/11/2023; UNODC 06/09/2022). El Cauca tiene el cuarto nivel más alto de explotación ilegal de oro entre todos los departamentos de Colombia, y una parte significativa de esta ocurre en territorios de comunidades étnicas (UNODC 06/09/2022).

Además de las economías ilícitas que sostienen los grupos armados en la región, su presencia y sus actividades también repercuten negativamente en los medios de subsistencia de las comunidades. Estas actividades incluyen la siembra de minas terrestres, el desplazamiento y el confinamiento que limitan el acceso a los recursos naturales y a los mercados.

### Impacto

Las acciones directas de los grupos armados, como los ataques a infraestructuras, las amenazas al personal y el uso de minas terrestres, tienen graves repercusiones en las comunidades. Las minas terrestres restringen la movilidad y el acceso a los recursos de subsistencia, al tiempo que imponen limitaciones a los desplazamientos de las personas mediante tarjetas de identificación y peajes. Estas acciones, con el cultivo de coca y la minería ilegal, tienen impactos ambientales significativos que no son monitoreados de manera adecuada, lo que afecta gravemente las fuentes de agua, la fertilidad del suelo y la biodiversidad (KII 11/08/2023). Los gobiernos que abogan por la sustitución de cultivos como alternativa al cultivo de coca también han respaldado monocultivos que pueden afectar al medioambiente y a las comunidades (Comisión de la Verdad, consultado el 15/11/2023).

Las restricciones y barreras a la libertad de circulación, incluidas las situaciones de aislamiento, confinamiento y desplazamiento forzado, se vuelven prominentes en un entorno en el que los recursos y las oportunidades son limitados debido al conflicto armado. Las medidas que impiden el acceso a la identidad jurídica, los recursos y la justicia, agravadas por unas condiciones económicas adversas, también crean un contexto propicio para el aumento de las vulnerabilidades y los riesgos en las comunidades afectadas.

## RIESGO 3:

El riesgo de colapso del sistema sanitario en el Cauca amenaza los servicios médicos esenciales. Esto empeora los problemas de salud y aumenta el riesgo de mortalidad, en especial en situaciones de emergencia.

### Justificación

Existen múltiples retos para las instituciones de salud encargadas de brindar atención médica y sanitaria a la población del Cauca. Las complejidades que afectan a los sistemas de proveedores de salud (formalmente conocidos como Entidades Promotoras de Salud) son la causa de algunos problemas persistentes, como la escasez de medicamentos, las precarias condiciones de los centros de salud y la falta de personal médico, que han debilitado la prestación de asistencia médica en la región (KII 01/11/2023). La baja cobertura médica, sobre todo en las zonas rurales, se atribuye a factores como la pobreza, la desigualdad, las infraestructuras inadecuadas y la escasa presencia del Estado (KII 08/11/2023; Truth Commission consultado el 11/08/2023).

El conflicto armado ha aumentado las necesidades médicas en la región, ya que los grupos armados amenazan a los profesionales de la salud (KII 14/11/2023; KII 23/10/2023). Los sucesos violentos y la falta de acceso a los servicios básicos han provocado un aumento de la demanda de atención médica, incluidos medicamentos, vacunación, apoyo psicosocial y salud general (OCHA 04/10/2023).

### Impacto

El posible colapso del sistema sanitario en el Cauca tendría consecuencias de gran alcance. Los habitantes enfrentan interrupciones en su tratamiento debido a las dificultades para acceder a la medicación esencial, sobre todo las mujeres gestantes, las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, (AAH et al. 01/11/2023). El conflicto armado en el Cauca ha tenido un impacto negativo tanto en la atención primaria como secundaria de la región; el impacto en la atención secundaria ha sido el más grave, puesto que los servicios de atención secundaria dependen de la infraestructura y los recursos que han sido dañados o destruidos por el conflicto. En particular, los proveedores de atención sanitaria secundaria también suelen ser reacios a viajar a las zonas afectadas por el conflicto por motivos de seguridad (KII 11/15/2023; KII 23/19/2023). En varios municipios del departamento, como López de Micay y Argelia, se ha informado de que muchos residentes carecen de acceso a los servicios de salud secundarios que necesitan. Esto es especialmente preocupante en el caso de las personas con enfermedades crónicas, ya que pueden no recibir la atención continuada necesaria para controlar sus dolencias (AAH et al.

11/08/2023 y 01/11/2023). Para quienes requieren atención médica especializada, la limitada capacidad de los centros médicos y hospitales en la mayoría de los municipios obliga a remitir a los pacientes a ciudades principales, como Popayán y Cali, lo que crea obstáculos logísticos para un tratamiento oportuno y eficaz (AAH et al. 11/08/2023).

Los problemas de salud mental cobran gran importancia, en la medida que la comunidad sigue lidiando con el impacto duradero de la guerra y la constante reexposición al conflicto. El persistente temor al reclutamiento, especialmente entre los jóvenes, añade una capa de tensión (KII 14/11/2023; KII 23/10/2023). Los centros de salud existentes también carecen del personal necesario para proporcionar apoyo psicológico crucial (AAH et al. 01/11/2023).

Los casos de violencia sexual, aunque frecuentes, siguen sin abordarse, en gran medida debido a la presencia constante de grupos armados. Los sobrevivientes, traumatizados y físicamente perjudicados, se quedan sin el apoyo médico y psicológico esencial, lo que contribuye a que aumenten los riesgos para la salud tanto inmediatos como a largo plazo. La desconfianza generalizada en los mecanismos de denuncia y en las entidades institucionales disuade aún más a los sobrevivientes de buscar ayuda. Esto no sólo complica la identificación de los casos que requieren atención médica y psicosocial urgente, sino que también pone de manifiesto una preocupante normalización de estas situaciones por parte de las entidades institucionales (KII 15/11/2023). El miedo generalizado a las represalias y el estigma social impiden a los supervivientes denunciar, lo que perpetua una cultura del silencio. Los casos de violencia sexual no abordados no sólo infligen daños directos a las sobrevivientes, sino que también erosionan la confianza en las instituciones destinadas a proporcionar protección y justicia. Para agravar el problema, los profesionales de la salud a menudo tienen dificultades para responder de modo adecuado a estos casos, inseguros de cómo proporcionar apoyo sin causar, sin darse cuenta, más daño o revictimizar a las sobrevivientes.

El efecto acumulativo de estos factores esboza el sombrío panorama de las graves consecuencias del colapso del sistema sanitario.

## ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS

### Aumento del reclutamiento forzado de niños en el conflicto armado

La alta presencia de grupos armados en el Cauca ha provocado un aumento significativo del reclutamiento de niños y adolescentes. Entre enero de 2021 y agosto de 2023, se documentaron más de 350 casos; los niños y adolescentes de comunidades étnicas y campesinas son los más afectados, lo que pone de manifiesto un importante problema de subregistro (KII 20/10/2023). Dicho esto, estos datos son objeto de debate. Entre 2019 y 2022, las comunidades indígenas del Cauca realizaron un monitoreo sistemático y documentaron más de 500 niños reclutados en sus territorios (CNTI 06/11/2023). Durante el primer semestre de 2023, el Consejo Regional Indígena del Cauca reportó 120 casos de reclutamiento. No obstante, subrayan que se trata de una cifra aproximada, pues es probable que el número real sea mucho mayor (CRIC 14/03/2023). Las zonas con mayor número de casos notificados son la región oriental (con el 34% de todos los reclutamientos de niños), la zona norte (30%) y las zonas nororiental y oriente (14% cada una). En particular, el 38% de las víctimas de reclutamiento son niñas expuestas a violencia sexual (KII 20/10/2023). No se dispone de un desglose preciso que discrimine por edad y sexo. Los informes indican que las personas reclutadas suelen ser reubicadas en municipios distantes, lejos de su territorio de origen (KII 01/11/2023; KII 27/09/2023).

Los jóvenes que se enfrentan la pobreza y dificultades económicas son especialmente vulnerables al reclutamiento forzado por parte de estos grupos. Las razones por las que los niños acceden al reclutamiento pueden variar, entre ellas la búsqueda de protección y la sucesión a la influencia social. La situación se ve agravada por la falta de acceso a una educación adecuada durante el conflicto armado, ya que las escuelas se han convertido en zonas de conflicto y amenazas. También hay informes que indican que tanto los grupos armados como las fuerzas estatales han utilizado escuelas como escudos, violando el derecho internacional humanitario (KII 08/11/2023). Se han identificado tres tipos de amenazas en relación con el acceso a la educación: amenazas al personal educativo, minas terrestres y enfrentamientos que se producen cerca de los centros educativos, además de amenazas directas contra los niños que intentan asistir a clase (KII 20/10/2023; OCHA 15/09/2023; EE 13/09/2023).

Los niños reclutados se enfrentan a un alto riesgo de violencia cuando son empleados en operaciones militares, que los exponen al impacto psicológico de sufrir lesiones o morir. También pueden ser víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de los grupos armados, lo que les provoca trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos (STC 31/08/2023). Tras su liberación, estos pueden encontrar dificultades para

adaptarse a la vida civil. Los retos a los que se enfrentan estos niños van más allá de los riesgos físicos y psicológicos inmediatos. Históricamente, el proceso de reintegración ha sido complejo y sigue siendo una preocupación importante para las comunidades afectadas. La carga psicológica de las experiencias pasadas de los niños reclutados puede obstaculizar su capacidad para confiar, establecer relaciones sanas y participar en interacciones sociales regulares. El estigma vinculado a su asociación con grupos armados también plantea un reto social considerable. Los menores reclutados suelen verse marginados y estigmatizados por sus comunidades, lo que dificulta los esfuerzos de reintegración. Esta exclusión social agrava los sentimientos de aislamiento y alienación, creando obstáculos en su camino hacia una vida civil estable (KII 15/11/2023; KII 20/10/2023).

El reclutamiento forzado de jóvenes refuerza a los grupos armados al proporcionarles un mayor número de combatientes y contribuye a incrementar la deserción escolar y la violencia en la región, incluyendo masacres, desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos (KII 20/10/2023). A pesar del importante número de casos notificados, persiste el subregistro de los casos de reclutamiento. Las familias no reportan estos casos por miedo a las represalias de los grupos armados. Otros factores que contribuyen a la falta de denuncias son la inadecuada respuesta institucional para prevenir y abordar el reclutamiento, la cultura del miedo impuesta por los grupos armados y los vacíos de información (KII 08/11/2023; KII 01/11/2023; KII 27/09/2023).

### Violencia basada en género

Históricamente, la VBG ha sido un problema generalizado presente en el conflicto armado en Colombia, la cual afecta a niñas, niños, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+ (Comisión de la Verdad consultada el 27/11/2023). A pesar de los escasos informes formales, todas las entrevistas con informantes clave subrayaron que estas formas de violencia siguen siendo motivo de gran preocupación. En situaciones de conflicto, la VBG puede aumentar de modo considerable debido a la impunidad y a la normalización de la violencia. La seguridad y el bienestar de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en el Cauca siguen sin ser abordados, denunciados y, a menudo, pasados por alto en el marco del conflicto armado (Ruta Pacífica de las Mujeres 05/2017). En noviembre, Cauca tenía la sexta tasa más alta de homicidios por cada 100 000 mujeres y el cuarto mayor número de homicidios a nivel nacional (3iSolution et al. 10/11/2023).

Varias organizaciones reconocen que no se denuncian todos los casos de violencia contra las mujeres, en especial en las comunidades indígenas y afrocolombianas (KII 14/11/2023; KII 23/10/2023). Debido a la falta de datos completos sobre el tema, resulta difícil especificar las formas exactas de VBG que se ejercen y los perfiles tanto de los sobrevivientes como de los agresores.

En noviembre de 2023, el departamento había registrado 15 casos de feminicidio, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor (3iSolution et al. 10/11/2023). De acuerdo con las entrevistas a informantes clave, las organizaciones han hecho esfuerzos para declarar la alerta de feminicidio en algunos municipios, como Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. El miedo a las represalias complica aún más la situación, puesto que las mujeres dudan en denunciar los incidentes debido a las posibles represalias. A pesar de la existencia de canales de apoyo, estas denuncias suelen añadir otro nivel de trauma para las mujeres. Los profesionales de la salud también pueden carecer de la formación necesaria para manejar o responder eficazmente a estas situaciones, lo que representa un nivel adicional de complejidad para los retos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a un apoyo adecuado y sensible. La falta de consciencia sobre las diversas formas de VBG dentro de las instituciones, unida a factores culturales, disuade a las mujeres de denunciar estos incidentes (KII 14/11/2023).